

Crónica del mes

Octubre

Octubre fue un mes de desastres para El Salvador. Las intensas lluvias que caían desde septiembre en todo el territorio nacional anunciaban un invierno copioso; la vulnerabilidad de cientos de familias también anunciaba la propensión al desastre. Solo bastó que las precipitaciones se mantuvieran constantes por unos días para que todo el país entrara en situación de emergencia nacional: la tormenta tropical Stan había tocado la costa atlántica de México y se había ensañado sobre los pobladores del Estado de Chiapas, en aquel país, la región central y sur de Guatemala y prácticamente todo el territorio de El Salvador. En este último país, la naturaleza sorprendería por otro frente. El volcán de Santa Ana, conocido como Ilamatepec, lanzó desde sus entrañas inmensas cantidades de material volcánico. El país vivía una emergencia doble, poniendo en aprietos a los cuerpos encargados de la atención de la emergencia. Una vez más, la situación de vulnerabilidad, sumada a los fenómenos naturales, se cobraba la vida de por lo menos 70 salvadoreños. La primera semana del mes fue crucial.

El 1° de octubre, el Ilamatepec entró en erupción al filo de las 8 de la mañana, lanzando vapor, ceniza y rocas incandescentes a varios kilómetros a la redonda. El fenómeno provocó la muerte de dos personas y la evacuación de otras 5 mil, que se sumaron a las 15 mil que habían evacuado anticipadamente por sus propios medios, según el ministro de Gobernación, René Figueroa. Mientras tanto, las intensas lluvias que caían en todo el territorio nacional por Stan habían cobrado la vida de 32 personas y causado inundaciones, derrumbes y el desborde de ríos, entre el 2 y el 3 de octubre. Días después, el 6, a casi una semana de intensas lluvias, el presidente Saca relativizó las críticas que diversos sectores hicieron en cuanto al manejo gubernamental de la emergencia: “En medio de todos los errores que hemos cometido, seguramente que los hemos cometido como humanos que somos y es una operación muy grande atender volcán, las lluvias, preparar comida, albergues... Me siento satisfecho”, dijo el mandatario. Mientras tanto, el gobierno preparaba una ofensiva diplomática para solicitar de la comunidad internacional ayuda en préstamos o donaciones para financiar la reconstrucción. Como respuesta a las críticas en el manejo de la distribución de la ayuda que fluía lentamente, a partir del día 8, el gobierno descentralizó el reparto de la ayuda, de modo que la misma comenzó a ser canalizada a través de las alcaldías que tenían albergues en su jurisdicción. Ese mismo día, fuentes del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) presentaron los resultados de una evaluación técnica que mediría el impacto económico en las plantaciones de café a consecuencia de la erupción del Ilamatepec. Según el estudio, unas 3 mil manzanas de plantación del grano se consideran de alto impacto. Por otra parte, al menos unas 50 manzanas de cultivo de maíz fueron anegadas en la zona del Bajo Lempa, según lo cálculos de los afectados, mientras que la cifra a nivel nacional manejada por la Cámara Agropecuaria (CAMAGRO) era de unas 87 mil manzanas de diversos cultivos.

Por otro lado, de acuerdo al Ministerio de Obras Públicas (MOP), aproximadamente el 85 por ciento de la red vial del país fue afectada por las lluvias. Para dicha entidad, la reparación de las obras de infraestructura rondaría los 120 millones de dólares. Esta información se vuelve más relevante cuando se confirma que varias de las calles afectadas eran de reciente construcción, lo cual sugiere que no fueron bien hechas. De igual forma, la ministra de Educación, Darlyn Meza, solicitó ayuda debido a los daños en varios centros educati-

vos. Según la funcionaria, 313 escuelas resultaron afectadas y 86 de estos centros no podrían continuar funcionando por los graves daños sufridos. Meza sostuvo que las obras de reparación ascienden a los 1.5 millones de dólares, aproximadamente. En los centros educativos con daños severos, algunos funcionarios del Ministerio de Educación consideraron que el año lectivo prácticamente había terminado y que se tomaría en cuenta la moción de promover a los estudiantes al grado inmediato superior.

Otra cartera de Estado que también proporcionó cálculos de pérdidas fue el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS). El ministro del ramo, Guillermo Maza, expresó que los daños en las distintas unidades sumaron pérdidas por quince millones de dólares. A esta cifra se deben añadir las pérdidas, aún no estimadas, por el vencimiento de varios medicamentos en las bodegas del Ministerio de Salud. Muchos medicamentos no fueron distribuidos de las bodegas a los centros de salud respectivos, ya que muchas unidades de salud se encontraban incomunicadas por los daños en las carreteras. En lo tocante a las obras de reconstrucción, el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, mencionó que se haría una reasignación presupuestaria para el próximo año.

Luego de una semana de emergencia en todo el territorio nacional, la mayoría de salvadoreños regresaba a sus actividades habituales. Salvo las escuelas públicas y los colegios privados, que normalizaron a medias sus actividades, los empleados de gobierno, la empresa privada y otros sectores que habían paralizado, reanudaron sus labores desde el 10 de octubre. La mayoría de la población, pues, volvía a la normalidad. Pero la emergencia continuaba. El COEN disminuyó la intensidad de la alerta, de roja a amarilla, hasta el día 12, lo que significa que hasta entonces algunos puntos del territorio nacional constituían amenaza y se mantenían activos los organismos de atención de la emergencia. Esta situación se daba en algunas zonas costeras y bajas, como la del Bajo Lempa, donde la gente regresaba a sus viviendas, pero habían perdido sus cultivos y animales domésticos; también había situaciones de riesgo para los habitantes de los bordes de quebradas y arenales del área metropolitana de San Salvador, cuyas viviendas quedaron más vulnerables que antes, o destruidas. Similar situación enfrentaron muchos pobladores de los departamentos de Sonsonate y Santa Ana, donde el volcán Ilamatepec seguía en actividad.

Pese a que, hasta el día 12 de octubre, casi la mitad de los albergados había regresado a sus viviendas —o lo que quedó de ellas—, aún permanecían unos 40 600 salvadoreños en los 412 refugios extendidos en todo el país. De los 14 departamentos de la República, solo La Unión no registraba refugiados. Pero en La Libertad, por ejemplo, todavía se hallaban unos 10 600 salvadoreños albergados y una cifra similar en el departamento de San Salvador.

Un día antes, el 11 de octubre, el gobierno de El Salvador había conseguido, en el marco de la XV Cumbre Iberoamericana celebrada en España, un donativo combinado de más de 3 millones de dólares para enfrentar la emergencia provocada por Stan y el Ilamatepec. La ayuda provino de los gobiernos de España, Francia e Italia. Un día después, un medio de prensa reveló que la ayuda comprometida ascendía a 7 millones de dólares, entre efectivo y especie. El 12, un periódico de circulación nacional publicó una entrevista realizada al representante del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en El Salvador, Jaime Vallauré, quien calificó de "lenta" la distribución de la ayuda coordinada por el Comité de Emergencia Nacional (COEN). Vallauré descartó que se diera una situación de desabastecimiento de alimentos en el país.

Dos días después, el 14, el presidente Saca aseguró que, según datos preliminares, el país necesitaba de al menos 229 millones de dólares para afrontar las tareas de reconstrucción luego de la emergencia. El mandatario enumeró las prioridades de la reconstrucción: salud, obras públicas, educación, agricultura y apoyo a la micro y pequeña empresa. Las torrenciales lluvias, pues, dejaron daños severos en la infraestructura social y privada. Pero más lamentable que la destrucción material es la pérdida de vidas humanas, sobre todo si las personas que fallecieron eran jefes de hogar, lo cual vuelve mucho más delicada la situación de muchas familias de cara al futuro. Lo importante es que frente a la nueva etapa, el Estado no solo debe reconstruir la infraestructura social —reparación de calles, puentes, escuelas y unidades médicas—, también es necesario que realice obras de mitigación de riesgos para reducir la vulnerabilidad del país. Y, especialmente, debe establecer una ayuda sistemática a las familias seriamente afectadas por las inundaciones.

En materia de mitigación de riesgos, el presidente Saca dijo que daría especial importancia a la situación de las familias que viven frente a la Cor-

dillera del Bálsamo. De acuerdo al MOP, se cuenta con 7 millones de dólares para dichas obras de mitigación. También se hizo del conocimiento público que el gobierno gastará 11 millones de dólares para reestablecer el drenaje natural del lago de Ilopango, cuyo nivel aumentó considerablemente dañando a las familias que vivían cerca de la orilla. Se debe destacar que este gasto no fuera necesario si, después de los terremotos de 2001, el gobierno hubiera reestablecido el drenaje natural del lago.

Entre los costos de reconstrucción, el gobierno debió considerar también la ayuda sistemática a las familias damnificadas. Gran parte de las personas que se encontraban en los albergues perdieron absolutamente todo. Algunos de ellos, solamente perdieron los enseres del hogar, pero aunque cuentan con sus casas, estas se encuentran dañadas por el desbordamiento de ríos y quebradas. El gobierno debe destinar una gran cantidad de recursos para reestablecer, en algunos casos, y mejorar en otros, las condiciones de vida de los afectados por las lluvias. La ayuda ha debido comprender, entre otros aspectos, la manutención alimenticia por cierto tiempo, la provisión de ropa y calzado, la reconstrucción de viviendas y, como aspecto de especial importancia, la inserción de los afectados a actividades productivas.

Con todo, el manejo de la emergencia puso sobre la mesa de discusión nacional el tema de la rendición de cuentas. Por distintas razones, no es usual que en una situación de desastre se hable de rendición de cuentas o cosa semejante. Incluso, so pretexto de la gravedad de la crisis que se enfrenta, los llamados a la unidad suelen prevalecer sobre cualquier intento de evaluar críticamente el comportamiento de los actores estatales o privados, cuya responsabilidad en el desastre que se enfrenta es insoslayable. Quienes claman por una evaluación de ese tipo suelen ser condenados por los voceros oficiales y sus aliados en los grandes medios de comunicación; la acusación que usualmente se les lanza es la de estar politizando la situación, la de estar dividiendo a la sociedad en momentos en los cuales la unidad de todos y todas es la exigencia primordial.

Obviamente, se trata de argumentos que, además de poco sólidos, delatan un afán de encubrir, consciente o inconscientemente, a quienes tienen una responsabilidad directa en la situación de desastre. Esa complicidad y ese encubrimiento comienzan, aunque no lo parezca a primera vista, con

el manejo de las palabras y los términos que se emplean para referirse a los fenómenos que pueden estar ocurriendo. El ejemplo más llamativo de ello es la expresión “desastre natural”, cuyo uso indiscriminado por funcionarios, periodistas y empresarios introduce un sesgo que impide una interpretación más realista de un desastre, tanto en su gestación y desarrollo como en el manejo de su impacto social.

En este sentido, se impone el rechazo de la expresión “desastre natural” y su reemplazo por la palabra dura y simple “desastre”. Ahora bien, no se trata de un mero cambio terminológico, sino de un cambio de enfoque y de concepción. Y es que, si con la primera expresión lo que se hace es cargar en acento en la naturaleza como generadora de daños sobre la sociedad, la segunda obliga a prestar atención a las condiciones sociales (económicas, culturales, políticas) que llevan a determinados grupos sociales a ser propensos a padecer, más directamente que otros, el impacto de determinados fenómenos naturales. Es decir, hay desastre, no donde se produce, sin más, una erupción volcánica, un terremoto o el desborde de un río, sino ahí donde esa erupción, ese terremoto o ese desborde encuentran a una población expuesta —es decir, vulnerable— a su impacto. A mayor vulnerabilidad social, mayor impacto de las fuerzas de la naturaleza; es decir, mayor desastre.

Tras una situación de desastre, una de las cosas que necesariamente tiene que hacerse es pedir cuentas a las autoridades gubernamentales, tanto por lo que hicieron para disminuir las condiciones de vulnerabilidad social, como por el manejo de una situación de desastre en el momento en que la misma se generó. Es decir, la rendición de cuentas se impone como una obligación de las autoridades ante la sociedad en su conjunto como ante las víctimas del desastre —que también suelen serlo de la negligencia estatal y de la voracidad empresarial—.

Una vez que el país salga de los momentos más dramáticos, la rendición de cuentas por parte de la administración de Elías Antonio Saca deberá convertirse en un asunto de discusión pública de primera importancia. ¿Qué se hizo para proteger, desde el Estado, a la población más vulnerable del país? ¿Cuál fue el desempeño de las diferentes carteras de Estado en el manejo del desastre? ¿Fueron debidamente protegidas por el Estado la vida y los bienes de las familias afectadas por el mismo? ¿Está

preparado el gobierno para hacer frente a situaciones de emergencia como las que han golpeado al país durante los primeros días de octubre? ¿Cuál es la responsabilidad del gobierno ante las víctimas? ¿Es la complicidad de los gobiernos de ARENA con los grandes empresarios de la construcción —el grupo Roble, por ejemplo— una de las causas del deterioro del medio ambiente en las zonas altas de San Salvador y Santa Tecla? Si es así, ¿cómo deducir responsabilidades? ¿Van a asumir los responsables los costos económicos de los daños provocados? Pasada la situación de emergencia, estas y otras preguntas esperaban respuesta.

El problema de la rendición de cuentas tiene que ver con este otro: la corrupción. Y sobre ello se discutió también durante octubre. El día 17, el periódico *La Prensa Gráfica* comenzó una serie de entregas en las que denunciaba supuestas irregularidades administrativas cometidas durante la actual administración del Consejo Nacional para la Cultura y el Arte (CONCULTURA). “Una controversia por la presunción de alteración de documentos por medio de firmas en un proceso de adquisición de tres vehículos —que se realizó sin licitación— y dos procesos de licitaciones con señales de irregularidades son los tres casos que *La Prensa Gráfica* investigó y verificó mediante documentos que dan fe de la veracidad de las irregularidades”, se lee en la primera nota de prensa entregada por ese medio. Las entregas se prolongarían por toda una semana, en un esfuerzo de ese medio por desviar la atención de la sociedad, que, por el contrario, exigía una justa rendición de cuentas al Ejecutivo por el manejo de la ayuda nacional e internacional.

Luego vendría otro caso que abre las puertas a la falta de transparencia, solo que esta vez en el marco de los preparativos a las elecciones legislativas y municipales de 2006. Ese mismo 17 de octubre, la fracción legislativa del FMLN acusó a los partidos ARENA, PCN y PDC de atentar contra la democracia electoral por aprobar reformas que dejan la toma de decisiones “administrativas” en el Tribunal Supremo Electoral por el mecanismo de voto por mayoría simple. Dentro de las enmiendas se aprobó que, por ejemplo, el TSE autorice licitaciones con mayoría simple (3 de 5 magistrados), anulando el voto calificado (4 de 5). El argumento del miembro del COENA, Marcos Funes, es que con la medida se aseguraría que el FMLN “no interfiera” en el desarrollo de las elecciones. Las reacciones no se hicieron esperar. Días des-

pués, el 19, el columnista Joaquín Samayoa comentaba, desde su espacio en un medio de prensa escrita, que “lo que está en juego en esas decisiones ‘administrativas’ no es solo la adquisición de papelería y útiles, o la contratación del mantenimiento de las computadoras. También la integración de las juntas electorales, para la transparencia de las elecciones, se podrá realizar sin el estorbo del principal partido de oposición, solo con los votos de los representantes de los partidos que aprobaron la reforma [...] En la medida en que el TSE vaya tomando decisiones respaldadas solo por esos tres votos —continuaba Samayoa—, habremos regresado, para todo efecto práctico, a la indeseable situación que existía antes de los acuerdos de paz, es decir, a un organismo electoral que procede o es percibido como un apéndice del partido gobernante”. Ese mismo día, el magistrado suplente del TSE por la Corte Suprema de Justicia, Antonio Hernández, calificó como “un deterioro a la administración de justicia electoral” las reformas aprobadas en el funcionamiento del ente electoral. Hernández y representantes de otros sectores nacionales, entre ellos el partido Cambio Democrático (CD), pidieron al presidente Saca que vetara las enmiendas.

Las reformas al funcionamiento interno del TSE refuerzan una tendencia a monopolizar al organismo a favor del partido ARENA. Estas reformas permiten tomar decisiones por mayoría simple, con lo cual bastarán los votos de ARENA y el PCN, tanto en las juntas electorales como entre magistrados para inclinar la balanza a favor de los intereses oficialistas y de sus compañeros de viaje. Por otra parte, hay un marcado interés por detener otro peligro potencial para los intereses de ARENA. Se trata del surgimiento de nuevos proyectos de izquierda. En las elecciones pasadas, el partido Centro Democrático Unido (CDU) no alcanzó el mínimo de votos requerido para evitar su cancelación. Tampoco lo lograron la Democracia Cristiana ni el Partido de Conciliación Nacional (PCN), pero este último obtuvo su “resurrección” gracias a los buenos servicios prestados a ARENA. Los despojos del PDC se mueven todavía en el ambiente político en medio del oportunismo que los ha caracterizado. En el caso del CDU, este último se presentaba como una alternativa para captar los votos de aquellos sectores de izquierda no afines al FMLN.

En un análisis simplista, muchos afirman que la aparición de nuevos partidos izquierdistas solo

beneficia a ARENA, pues serían menos votos para el FMLN. Sin embargo, en una sociedad democrática es imposible que solo haya *una* alternativa de izquierdas, puesto que la izquierda salvadoreña dista de ser algo homogéneo. Ni siquiera el FMLN mismo ha sido un partido unificado internamente. Contar con un abanico amplio de opciones de izquierda podría ayudar a captar a aquellos sectores que se niegan a votar. Por supuesto que habría que trabajar en una coalición electoral en la que se reúnan los distintos matices de la izquierda, revisando, quizás, el espíritu con el que surgió, en los años ochenta, el Frente Democrático Revolucionario (FDR): una agrupación de partidos políticos socialdemócratas, socialcristianos y cercanos al Partido Comunista, junto a sindicatos, universidades y organizaciones populares.

Con algo semejante, el partido ARENA temblaría en las elecciones. Pero sabe que la izquierda salvadoreña está sumamente dividida. Se quiere curar en salud al evitar que el nuevo partido político, llamado también FDR, logre participar en los próximos comicios. El FMLN es miope al no ver más allá de las viejas rencillas con los dirigentes del nuevo partido, otrora correligionarios suyos. Permitir que surjan nuevas alineaciones de izquierda o de centroizquierda es una forma de ir debilitando a partidos como el PCN: partidos cuyos dirigentes saben que ya no son opción política y que solo sirven para poner a disposición sus votos legislativos para quienes detentan el poder. Pero el FMLN sigue pensando que quien se aleja de sus filas lo hace solo por traición. Así las cosas, las elecciones municipales y legislativas del año entrante solo permiten esperar una campaña con lo peor de la política local. En otras palabras, será una nueva oportunidad desperdiciada de utilizar los procedimientos democráticos para cambiar las cosas en el país.

Para culminar, el día 18, la organización no gubernamental Transparencia Internacional (TI) reveló los resultados de la medición anual que hace de la percepción sobre la corrupción. En los resultados, El Salvador obtuvo una calificación de 4.2 en una escala de 1 al 10, pero aún así se ubicó, junto a Costa Rica, muy por encima del resto de países de la región centroamericana y en la sexta posición de toda América Latina. "La corrupción es una de las mayores causas de la pobreza, a la vez que representa una barrera para combatirla", dijo el presidente de TI, Peter Eigen.

Así las cosas, los cuestionamientos a la probidad pública se dieron en el marco de los preparativos a los comicios del año próximo, coyuntura abundante en expresiones de fanatismo ideológico exacerbado y violaciones a la normativa electoral vigente. No ha sido necesario que el Tribunal Supremo Electoral diera por comenzada la campaña proselitista; bastó con unos cuantos meses de antelación para que las expresiones más virulentas de la izquierda y la derecha locales salieran a flote. Y es que una de las triquiñuelas más típicas es comenzar la campaña *de facto* antes que el TSE haga la inauguración oficial. Esto en la creencia de que quien pega primero, pega dos veces. El gobernante partido ARENA ya comenzó a hacer lo propio. Ha llenado las calles de San Salvador —bastión de la izquierda desde hace varios años, para consternación suya— con fotografías de su candidato y banderas tricolor. Por su parte, la comuna capitalina ha procedido a quitar dicha propaganda, la cual, según personeros de ARENA, no es campaña electoral anticipada, por cuanto las banderas de su partido no aparecen con la cruz que invita a votar. ¿Se tratará de sutilezas que el electorado y la oposición no comprenden, o, simplemente, que se quiere insultar la inteligencia de la ciudadanía?

Otra forma de hacer campaña por adelantado se dio, lamentablemente, en los días de las inundaciones. Algunos de los candidatos oficialistas se dieron una vuelta por las comunidades damnificadas, vestidos con chalecos de su partido político. Por otro lado, los municipios administrados por la izquierda no recibían ayuda por parte del gobierno central, como para hacerle entender al electorado lo que pasa por no votar por ARENA. Lo alarmante es que el TSE no puso freno a la campaña anticipada de ARENA. La institución encargada de garantizar la limpieza de los comicios tiene muchas dificultades para cumplir con su misión, pues no es una entidad autónoma de los partidos políticos. Sus magistrados pertenecen a los partidos que obtienen mayor cantidad de votos en cada elección. Por lo tanto, no es razonable esperar que actúen en contra de sus propios intereses. Al TSE le pasa lo mismo que a la Corte de Cuentas de la República. Son organismos que, por su índole, deberían funcionar como instrumentos para que la ciudadanía pida cuentas: en el caso de la Corte, sobre el manejo del dinero público; en el caso del TSE, acerca de la limpieza de las elecciones. No obstante, son parte del botín que se reparten entre sí los partidos políticos.

Las encuestas también empezaron a proliferar en el ambiente. A finales de octubre, los dos principales periódicos matutinos han difundido los resultados de sendas encuestas, en las que tanto el presidente Saca como la forma de gobernar del partido ARENA gozarían de la aprobación mayoritaria de la población. Destacó, por ejemplo, el que, según las encuestas, la "población cree que el país va por el rumbo correcto". Los sondeos destacan las cualidades personales del presidente Saca quien resulta ser el mejor mandatario evaluado en dieciséis años de gestiones areneras. Es cierto que, frente a un Francisco Flores con un marcado talante autoritario, el actual mandatario destaca por su accesibilidad. Pero —y quizás esto es lo que las interpretaciones triunfalistas de las encuestas no enfocan— no se trata tanto de las virtudes personales de los funcionarios públicos, sino del proyecto de país que estos representan. Por mucho que el presidente Saca proyecte la imagen de un mandatario "cercano a la gente", como reza el lema oficialista, y por mucho que Schafik Handal siga siendo un personaje impopular, lo cierto es que la economía sigue siendo el talón de Aquiles de los gobiernos de ARENA.

Una cosa distinta, además, es afirmar que el mandatario goza del 60 por ciento de aprobación, que detallar cómo se consiguió este resultado: sumando el 21 por ciento de los encuestados que afirman que la gestión gubernamental está "muy bien" a los que la califican como "algo bien", que ascienden al 39 por ciento. Entre "muy bien" y "algo bien", hay una diferencia de matices bastante clara. Habría que ver si acaso este "algo bien" no equivaldrá a "regular" (que alcanza el 17 por ciento de las respuestas).

Finalmente, en lo que a socioeconómico se refiere, destacaron en octubre, primero, la inclusión de El Salvador en la lista de países que compiten para obtener parte de los fondos provenientes de la Cuenta del Milenio y, segundo, el inicio de la ejecución del esperado programa Red Solidaria, que proporciona un subsidio mensual a las familias más pobres del país escogidas por el gobierno central. Todo ello fue precedido por la discusión generada en torno a la entrega del anteproyecto del plan de gastos del Estado a la Asamblea Legislativa, hecho que ocurrió el 30 de septiembre, pero que se diluyó por la situación de emergencia. Y es que el ministro de Hacienda, Guillermo López Suárez, había entregado a los diputados de la

Asamblea Legislativa el anteproyecto de la ley del presupuesto general de la nación correspondiente a 2006, que asciende a 3 338 millones de dólares. La presentación del plan de gastos del Estado despertó una nueva lluvia de críticas entre las fracciones opositoras por la política de endeudamiento manejada por el gobierno. Ante las críticas, el presidente Antonio Saca aseguró el último día de septiembre que, tras su retiro en el 2009, el país tendría una deuda pública de entre el 38.5 y el 39 por ciento en relación con el PIB, una cifra responsable y manejable, según el mandatario. "Espero que los diputados reflexionen y no agarren el presupuesto como caballito de batalla de la campaña electoral, porque entonces los salvadoreños pasarán la factura a los partidos políticos que atrasen el desarrollo del país", advirtió Saca.

Durante las siguientes semanas, la dinámica económica pasaría relativamente desapercibida debido a la situación de emergencia. La presencia de lo económico en el debate público se concentró en las evaluaciones preliminares de los costos de la emergencia suscitada por Stan y el Ilamatepec. Solo al final del mes otros temas cobraron relevancia. Por ejemplo, trascendió que el día 20, el secretario de comercio norteamericano, Carlos Gutiérrez, se reunió con los presidentes centroamericanos y de República Dominicana en San Salvador, a quienes advirtió que debían comprometerse a agilizar las reformas legales e institucionales que permitieran la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y Centroamérica (CAFTA) a partir del 1° de enero de 2006.

Dos días después, se conoció que El Salvador estaba dentro de la lista de países que compiten por ser incluidos en la llamada Cuenta de Desafío del Milenio, con el proyecto de construcción de la Carretera Longitudinal del Norte, poniendo a soñar al gobierno salvadoreño y a la Comisión Nacional de Desarrollo, principales impulsores de ese ambicioso proyecto. La llamada Cuenta del Reto del Milenio es un fondo de 450 millones de dólares que el gobierno de Estados Unidos ha ofrecido a países en desarrollo, iniciativa anunciada por el presidente estadounidense, George W. Bush, durante la pasada Cumbre de Monterrey sobre Financiamiento para el Desarrollo. De acuerdo a la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID), dicho fondo financia iniciativas para mejorar las economías y niveles de vida en países en desarrollo calificados, recompensando las decisiones correctas

de políticas que apoyen el desarrollo económico y reduzcan la pobreza entre esos países.

La calificación no es automática, pues parte de “un conjunto de criterios claros, concretos y objetivos” para evaluar los avances entre los países, según el mandatario norteamericano. Por tanto, la Cuenta del Reto del Milenio reconoce que la asistencia al desarrollo económico puede tener éxito únicamente si está unida a políticas que Estados Unidos considere correctas en los países en desarrollo. En consecuencia, los fondos serán distribuidos a países en desarrollo que, según sus creadores, demuestren “un firme compromiso” con respecto a los siguientes criterios. En primer lugar, buena administración, que supone extirpar la corrupción, defender los derechos humanos y cumplir los preceptos de la ley. En segundo lugar, un compromiso probado para aumentar la inversión en educación, atención a la salud y vacunación, situaciones que, de acuerdo a USAID, dan como resultado ciudadanos sanos y formados que se convierten en agentes del desarrollo. Finalmente, se considera el compromiso en políticas económicas correctas que fomentan la formación de empresas y las actividades empresariales, lo que supone más mercados libres, políticas presupuestarias sostenibles y un fuerte apoyo a las actividades empresariales individuales.

A mediados de octubre, la prensa salvadoreña destacó que la competencia se reducía a siete países en el mundo y que se incluía a El Salvador pese a tener un nivel de desarrollo medio bajo. Pero lo más llamativo de la noticia fue la consideración de competir con la bandera de la Carretera Longitudinal del Norte, un ambicioso proyecto pensado desde la década de los años cincuenta y que busca conectar mediante un corredor económico los departamentos de la zona norte del país. El gobierno espera obtener de Estados Unidos al menos 200 millones de dólares para echar a andar dicho proyecto. Las reacciones al anuncio no se hicieron esperar. Para la integrante de la Comisión Nacional de Desarrollo, Sandra de Barraza, el proyecto facilitaría la conexión entre 49 de los 262 municipios del país, beneficiando directamente a un porcentaje de la población que sobrepasa el 10 por ciento: “Ahí están 35% de los municipios, 12% de la población y 36% del territorio nacional”, aseguró la especialista a un medio de prensa escrita. Dicha postura fue secundada por el secretario técnico de la Presidencia, Eduardo Záblah:

“es la tercera parte del territorio nacional y la mitad de los municipios en extrema pobreza”.

La misma Comisión Nacional de Desarrollo exponía otros datos en el año 2000. Chalatenango, Cabañas, Morazán y La Unión —cuatro de los departamentos que atraviesa el corredor— presentan los más bajos índices de desarrollo humano; por otro lado, Chalatenango únicamente aporta el 0.2 por ciento de la recaudación fiscal del país, el 1.4 por ciento de las empresas y ha sido destino de únicamente el 3 por ciento de la inversión pública nacional en el año 2000. Las cifras son menores en Cabañas y Morazán, departamentos que presentan indicadores sociales más bajos. En contraste, la misma fuente periodística escribe: “irónicamente, la zona norte provee al país del 33 por ciento de energía, el 36 por ciento de agua potable y el 75 por ciento de la pesca continental”. Adicionalmente, las remesas enviadas por los chalatecos y unionenses, por ejemplo, superan a las enviadas por salvadoreños provenientes de otros departamentos, contribuyendo grandemente al sostenimiento de la economía familiar y nacional.

Así pintadas las cosas, la zona norte del país es una zona de contrastes, pero lo más preocupante del caso es la situación de marginación que la ha caracterizado históricamente. Las estadísticas del departamento de Chalatenango ilustran esta situación: mientras en ese departamento, la esperanza de vida para 1999 era de 66 años, en San Salvador era de 71.4 años. Para 2002, se elevó a 66.7 años; mientras en Chalatenango el 74.1 por ciento de los adultos (7 de cada 10 personas adultas) sabía leer y escribir en 1999, en San Salvador era el 90.7 por ciento, es decir, 9 de cada 10 capitalinos adultos. La escolaridad promedio, o sea, los años que un chalateco ha estudiado en promedio, es de 4.1 años, en 2002. En ese mismo año, la tasa de alfabetización de adultos experimentó un retroceso, al caer al 73.7 por ciento; el ingreso *per cápita*, o sea, por cada habitante de Chalatenango en promedio era de 2 578 dólares al año, mientras el capitalino en promedio recibía 5 954 dólares anuales. Para el año 2002, el ingreso se elevó a 3 419 dólares anuales por persona, en promedio, en Chalatenango.

Las disparidades continúan. Para 1999, el 30.3 por ciento de los chalatecos (o sea 3 de cada 10) no tenía acceso a agua potable, mientras que para los habitantes de San Salvador la cifra se reducía a 12.9 por ciento. En 2002, la cifra se eleva a 13.2 por ciento de los chalatecos; el 34.9 por ciento de

los habitantes de Chalatenango no tenían acceso a los servicios de salud en 1999, mientras el 16 por ciento de los capitalinos carecía de ese servicio en el mismo año. Además, casi la mitad de la población rural de Chalatenango (48.3) no tenía a su alcance servicios de salud y el 15.3 por ciento de los habitantes de las zonas urbanas carecían de esos servicios. Para 2002, el 13.1 por ciento de la población del departamento no llegaría a cumplir los 40 años debido a las condiciones de salud. En San Salvador, ese porcentaje se reduce al 8.7 por ciento de la población. Para 1999, el 34 por ciento de los chalatecos se encontraba en situación de pobreza extrema (gente que consigue menos de un dólar diario para sobrevivir). Es decir que de cada 10 chalatecos, casi cuatro no alcanzaban a conseguir un dólar al día. Aún así, los habitantes de San Vicente, Ahuachapán y Cabañas tienen mayores dificultades para sobrevivir. La situación de los habitantes de Morazán, el norte de San Miguel y La Unión no dista mucho de esta realidad.

Con toda razón, el anuncio de la prensa sobre la inclusión de El Salvador despertó tanto entusiasmo entre el gobierno, los representantes de la Comisión Nacional de Desarrollo y otros sectores. No es para menos, pues la lógica de aquellos es que con la construcción de la carretera y otras obras de valor social se mitigaría la pobreza de la zona, potenciando el desarrollo de sus habitantes. Pero lo cierto es que ni es seguro que se construya el corredor ni sus obras sociales paralelas ni menos aún que, de construirse, se asegure el desarrollo de la zona. Destaca el hecho de que buena parte de los habitantes de esos lugares no confían en que dichos proyectos les traigan beneficios directos, ya que, en primer lugar, no se empleará mano de obra local, sino que llegarán las grandes compañías constructoras con sus obreros contratados en otros lados, llevándose así una buena oportunidad para reactivar el empleo en la zona. También sostienen que las carreteras de ocho carriles solo benefician a las transnacionales y grandes empresas, que logran introducir fácilmente las importaciones a territorio nacional, sin detenerse a generar empleo en la zona. También aducen el daño ecológico que les supone la destrucción del poco bosque que les queda, así como la afectación de los mantos acuíferos, de los cuales se nutre también el área metropolitana de San Salvador. Muchos chalatecos temen la posibilidad de perder sus viviendas y propiedades por la inundación de extensas áreas que provocaría la construcción de una

nueva represa en la zona nororiental del departamento, cerca del municipio de San José Las Flores. A ello se suma el daño que causaría el proceso de extracción de minerales en algunas minas presentes en su territorio.

En suma, ante la inminente construcción de la carretera, los habitantes de esa zona exigen del Estado reorientar la generación de empleos y la inversión pública para revertir las tendencias. Exigen también la protección de su patrimonio natural y cultural. Pero eso no parece estar siendo considerado entre quienes quieren echar a andar el ambicioso proyecto con fondos provenientes del extranjero. Con todo, el entusiasmo desbordado por los funcionarios gubernamentales con motivo de la inclusión de El Salvador, en el concurso de la Cuenta del reto del Milenio, esconde la incapacidad de la sociedad salvadoreña de asegurar el desarrollo de todos sus habitantes, sin exclusión ni marginación. Es la misma historia de siempre.

El mes culminaba con una noticia de alivio para muchos salvadoreños. El 27 de octubre, las primeras familias, todas residentes en el municipio de Torola, Morazán, recibieron el primer desembolso del gobierno central en el marco del programa Red Solidaria. El presidente Saca, junto con la coordinadora del área social de su gabinete, Cecilia Gallardo de Cano, visitaron el municipio escogido para iniciar la primera transferencia de dinero en efectivo a las familias que se encuentran en situación de extrema pobreza. Con dicha transferencia, el gobierno espera que las madres "cabezas de familia" se comprometan en tres puntos con respecto a sus hijos: enviarlos a la escuela para elevar el nivel de educación, llevarlos a consulta médica para una mejoría en la salud y asistir a charlas sobre nutrición en las unidades de salud u hospitales para que experimenten retrasos en la talla y peso conforme a su edad.

En Torola, el total de las transferencias ascendió a 15 420 dólares. Este dinero se repartió entre 465 familias en sobres que contenían entre treinta y cuarenta dólares en efectivo. Las transferencias se realizarán cada dos meses durante tres años y están sujetas a que las familias beneficiadas cumplan los compromisos establecidos por el gobierno. En 2005, el gobierno espera atender 15 municipios del país, contando con un millón de dólares. Para 2006 se espera implementar Red Solidaria en otros 17 municipios. En total, entre 2005 y 2006, se estarían dando las "transferencias monetarias

condicionadas" a los 32 municipios más pobres del país. Entre los años 2007 y 2009 se atenderá a los sesenta y ocho municipios restantes que se encuentran en una mejor situación socioeconómica. Al finalizar Red Solidaria, el gobierno espera haber atendido las necesidades de 100 mil familias (800 mil personas) de los 100 municipios más pobres del país. La suma de todas las transferencias a las familias beneficiadas por el programa es de 13 millones de dólares.

Así, pues, octubre se iba con una buena noticia para unas cuantas familias pobres del país. Hay que decir que el esfuerzo es modesto, pero ya es un esfuerzo que busca aliviar, al menos parcial-

mente, la pobreza de quienes la viven en situación extrema. Queda pendiente la definición del concurso por los fondos de la Cuenta del Milenio, para potenciar el desarrollo de la zona norte del país, pero queda claro, una vez más, que el gobierno central no debiera depender exclusivamente de fondos ajenos y la caridad internacional para fomentar un desarrollo más equitativo de los salvadoreños. En vez de ello, quienes llevan las riendas del país debieran procurar una distribución más equitativa de la riqueza, pues con lo que unos pocos tienen en el país no solo se eliminaría la pobreza de todos los salvadoreños, sino que se aseguraría el futuro de las generaciones venideras.

